



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, Junio 16 de 2022

Radicado: 05001 31 05-013-2018-00625-00
Demandante: ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO.
Demandado; UGPP.
Asunto:. APELACIÓN DE SENTENCIA.
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

La accionante instauró proceso ordinario en contra de la UGPP solicitando se le reconozca la calidad e beneficiaria de sustitución pensional por el fallecimiento de su compañero permanente JOSÉ DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ, y en ese sentido se condene a la demandada a pagar a partir del 26 de septiembre de 1990 mesada pensiona junto con las mesadas comunes y ordinarias, e intereses moratorios.

El A quo, tras analizar los requisitos establecidos en las normas vigentes para el reconocimiento de la prestación, decreto 3170 de 1965 y ley 90 de 1946, indicó que la demandante no tenía derecho a la prestación que reclama, comoquiera que la norma es clara en establecer que la compañera permanente únicamente tiene derecho cuando no existe cónyuge reclamante, y en ese sentido, comoquiera que al momento del fallecimiento del causante existía cónyuge y fue a ella a quien se le reconoció la prestación inicialmente, no es posible luego reconocer la prestación a la compañera permanente, ya que, según la norma, esta última no tiene derecho, pues la relación de beneficiarios es excluyente.

Inconforme con la decisión fue recurrida por la parte demandante, quien indicó que la jueza de primera instancia desestima el interrogatorio de parte que rindiera la demandante al no encontrar confesión en sus dichos, sin embargo, considera que con esa prueba queda claro que si existió una relación de compañeros permanentes entre la demandante y el causante de quien se pretende la sustitución pensional, dijo que se encuentra probado que siempre convivieron juntos velando juntos por el hogar y las hijas que procrearon. Dijo que la UGPP se equivoca al considerar que en el presente caso si existió cónyuge, ya que, si bien si existía un vínculo matrimonial, la falta de cónyuge en realidad se tiene que advertir a que la misma no acreditaba la convivencia con el causante al momento de su fallecimiento y es en ese sentido que se debe entender la ausencia de la misma y en consecuencia reconocer la prestación a quien representa. Solicitó entonces la revocatoria de la sentencia emitida en primera instancia y en su lugar acceder a todas las pretensiones formuladas.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la apoderada de la demandante quien indicó que dentro del proceso se encuentra suficientemente probado que la accionante formó un vínculo familiar con el causante por más de 10 años y que, la negativa al reconocer la prestación que se solicita siempre ha estado respaldada en la existencia de una cónyuge, situación que no es armónica con la finalidad de la prestación, la cual busca proteger el núcleo familiar

del causante y no proteger un mero vínculo jurídico que no está respaldado por unión y conformación de familia.

Por su parte, la apoderada de la UGPP quien reiteró los argumentos de defensa expuestos a lo largo del proceso, ratificando que la negativa de la prestación que reclama la demandante obedece a que la misma fue reconocida a la señora OLGA DE JESÚS RÍOS GARCÉS quien era la cónyuge del causante y tiene un mejor derecho de conformidad a la norma aplicable para la fecha en que falleció JOSE DIONISIO GARCÉS. En ese sentido, solicitó sea confirmada la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que en este caso se encuentran por fuera de discusión que 1) el señor JOSE DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ falleció el 26 de septiembre de 1990 (pág. 15). 2) que la señora BLANCA OLIVIA GARCÉS PÉREZ nació el 5 de agosto de 1983 y es hija de ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO y JOSE DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ (pág.21). 3) que la señora MARIA ELENA GARCÉS PÉREZ nació el 10 de abril de 1979 y es hija de ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO y JOSE DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ (pág.23). 4) que a través de resolución 05871 del 7 de octubre de 1991 el ISS a través de la cual se le reconoció pensión de sobreviviente a la señora OLGA DE JESÚS RÍOS GARCÉS en calidad de cónyuge y a MARIA ELENA, GLORIA PATRICIA y BLANCA OLIVIA GARCÉS PÉREZ en calidad de hijas extramatrimoniales y no conceder pensión a la señora ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO (Pág. 30 a 37). 5) que a través de resolución RPD 033627 del 15 de agosto de 2018 negó reconocimiento de pensión a la señora ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO por no ser beneficiaria de del señor JOSE DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ (pág. 39 a 41).

De conformidad con lo anterior, en esta instancia se discute si la señora ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO tiene derecho a que se le reconozca y pague pensión de

sobreviviente en calidad de compañera permanente del señor JOSE DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ.

Ahora, teniendo en cuenta que el señor JOSE DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ al momento de su fallecimiento venía percibiendo pensión de invalidez de origen labora que fuera reconocida por el ISS a través de resolución 0616 de 1969 y que posteriormente falleció el 26 de septiembre de 1990, no es objeto de discusión que dejó causada la prestación para sus beneficiarios, que dada la fecha de su fallecimiento serían determinados por los artículos 26 y 27 del decreto 758 de 1990.

El A quo al momento de decidir sobre el litigio analizó los artículos 54 y 55 de la ley 90 de 1946, pues fue en virtud de esta ley y del Decreto 3170 de 1965 a través de la cual se le reconoció la pensión de invalidez al causante, norma que guarda similitud con el decreto que se propone como gobernante de la litis, toda vez que comparten criterio respecto de los beneficiarios de la pensión de sobreviviente, así el artículo 55 de la ley 90 de 1956 indica (...) *“ a falta de viuda, será tomada como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anterior a su muerte, o con la que haya tenido hijos, si en varias concurren estas circunstancias, sólo tendrá derecho proporcional las que tuvieron hijos del difunto”* y el artículo 27 del decreto 758 de 1990 indica en su numeral primero *“en forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o compañera permanente del asegurado”*

Razón por la cual se elija uno u otro texto normativo, la ley sustancial en ambas hace referencia a lo mismo y es que, la compañera permanente sólo tiene derecho a percibir la pensión cuando no existe cónyuge, siendo así el beneficio de este último excluyente con la pretensión que se pueda presentar por cualquier compañero.

Frente a este tema, la H. Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la norma aplicable en los casos en los que se pretende la pensión de sobreviviente es la vigente a la fecha del fallecimiento de quien deja causada la pensión, pues ha

considerado que no es posible la aplicación de las normas de forma retrospectiva, así, frente a un caso de similares (SL4651-2020) contornos indicó:

En el caso de las pensiones cuya obligación recae en el Instituto de Seguros Sociales, como en este asunto, desde la ley 90 de 1946, en su artículo 55, se consagró en favor de la compañera permanente el derecho a la pensión de “viudedad”, denominada después de sobreviviente, con la condición de que i) el afiliado no hubiere dejado cónyuge supérstite; ii) el del cujus y su derechohabiente se mantuvieran solteros durante el concubinato (declarado inconstitucional); iii) la reclamante hubiera hecho vida marital, durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero, a menos que hubiera procreado hijos comunes, para ello basta memorar las sentencias CSJ SL12896-2014, CSJ SL1131-2015, y CSJ SL4200-2016,

“el tribunal no infringió la norma antes aludida, pus como lo advirtió, la compañera sería beneficiaria de la pensión, siempre y cuando, no existiera cónyuge y, el presente caso, es un hecho probado no debatido, que Carlos Julio Rojas Rodríguez, a su muerte, tenía un vínculo marital vigente con María Antonia Rojas no obstante haber liquidado la sociedad conyugal, por lo que, sin dudarlo, era ella quien tenía derecho prevalente y excluyente de la pensión de sobreviviente (...)

Tampoco le asiste razón a la recurrente al sostener que se vulneró el principio constitucional de favorabilidad, en razón a que la Corte ha señalado que su aplicación abre paso, en caso de duda entre normas vigentes de trabajo y de seguridad social (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad 40662), escenario que no encaja en el sub examine, toda vez que para estos eventos, si existe norma que gobierna específicamente la definición del beneficiario de la pensión de sobreviviente para la época del deceso del afiliado causante, precepto que, por ende era el único aplicable.

Tema que ha sido abordado por la H. Corte Constitucional, quien a través de sentencia SU-454 de 2020, indicó frente a este tipo de casos en los cuales el derecho se causó con anterioridad a la expedición de la constitución de 1991 y se reclama la prestación ante los jueces ordinarios en vigencia de ella, como en el presente caso, señaló:

Dijo que desde la sentencia C-482 de 1998 se estableció sobre el artículo 55 de la ley 90 de 1946, que el criterio fundamental para determinar a quien le correspondía suceder en el derecho pensional al difunto, en casos de conflicto entre la cónyuge y la compañera permanente, era el de la convivencia efectiva al momento de la muerte del causante, no teniendo mayor relevancia el tipo específico de vínculo constitutivo de la familia

Síntesis de la regla de decisión: la sustitución pensional tiene por finalidad garantizarle a la familia del pensionado fallecido los recursos necesarios para que pueda mantener un nivel de vida similar al que llevaba cuando éste aún vivía. El régimen jurídico prevé que en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas, que dependían con mayor intensidad del causante y compartían con él su vida, reciban esta prestación. Tratándose de las compañeras permanentes como beneficiarias, al amparo de la Constitución derogada se les otorgó una protección precaria o nula, en la medida en que, por regla general, fueron excluidas del acceso al beneficio. No obstante, tal situación fue superada con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 que se inspiró en la especial protección a la institución familiar y destacó la igualdad imperante entre cónyuges y compañeras permanentes. Ante el advenimiento de dicho tránsito de orden constitucional, esta Corporación acogió el criterio de la retrospectividad para enjuiciar la situación jurídica de las compañeras permanentes que generaron su garantía prestacional en vigor de la norma fundamental del 86, con la muerte del causante, pero cuyos efectos siguieron produciéndose al amparo del orden vigente. Así, cuando tal circunstancia ocurre, los requerimientos prestacionales incoados deben ser juzgados de conformidad con los postulados de la Carta Política actual para proteger a quienes venían siendo abiertamente discriminados por el orden jurídico anterior.

Reiteró lo dicho en sentencia SU 574 de 2019, respecto que la Sala de Descongestión No.4 de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia debió aplicar, por encima de cualquier precepto legal y para definir adecuadamente el asunto sometido a estudio, los mandatos superiores de igualdad, solidaridad y dignidad humana, consagrados en la constitución de 1991

Dijo que la autoridad judicial estaba obligada a realizar un examen de constitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 55 de la ley 90 de 1946 para determinar el derecho de la peticionaria, es decir, analizarlos bajo los postulados de la constitución de 1991, específicamente en el artículo 42 el cual prescribe que la

familia es el núcleo fundamental de la sociedad y puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos; sus relaciones se basan en la igualdad de derechos así como el respeto recíproco entre todos sus integrantes y el Estado y la sociedad están obligados a garantizar su protección integral.

Consideró que la sala de Descongestión de la corte suprema de justicia, al desconocer el derecho pensional que reclamaba la compañera permanente con respaldo en una norma de inferior rango de la constitución (artículo 55 de la ley 90 de 1946), configura una violación directa de la carta política, pues en esta expresamente se establece que no es admisible la distinción fundada en el origen del vínculo familiar.

Analizado las diferentes posturas de las altas Cortes, esta Sala acogerá la más garantista para la reclamante, es decir, dará aplicación a la postura dada por el órgano encargado de velar por la aplicación de nuestra Carta política; en ese sentido, es claro que los argumentos expuestos por el A quo para negar la pretensión de la solicitante son improcedentes, pues en palabras de la H. Corte Constitucional es necesario para este tipo de casos el juez ordinario realice un control constitucional, analizando la norma a aplicar y verificando que la misma no contradiga los postulados de constitucionales. Y que, para el presente caso, significaría dar un retroceso al avance que normativo, constitucional y social respecto de la noción de familia. Por lo que seguir negando la prestación solicitada por la accionante por ostentar la calidad de compañera permanente a todas luces viola el derecho a la igualdad y seguridad social.

De conformidad con lo anterior, y quedando claro que el hecho de que al momento del fallecimiento del señor JOSÉ DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ tuvieran vigente el vínculo matrimonial no tiene como consecuencia la negativa de las pretensiones elevada por la demandante, pasa esta Sala a analizar si en el presente proceso se encuentra acreditado los demás requisitos que establece la norma, esto es que hubiese hecho vida marital con el causante durante al menos 3 años anteriores al fallecimiento o con la que haya tenido hijos.

Descendiendo al material probatorio, y si bien en el presente caso se recibieron prueba testimonial con la que se pretendía acreditar la convivencia por más de 15 años, no se hace necesario entrar a realizar dichas pruebas que por demás tuvieron tantas dificultades al momento de evacuarla en razón de que se tiene suficientemente acreditado que la accionante procreó dos hijas con el causante, BLANCA OLIVIA GARCÉS PÉREZ nació el 5 de agosto de 1983 (pág.21) y, MARIA ELENA GARCÉS PÉREZ nació el 10 de abril de 1979 (pág.23), con lo cual se acredita suficientemente la calidad de beneficiaria de la prestación solicitada.

Prestación que se reconocerá en la misma cuantía que venía siendo reconocida a las hijas y cónyuge, es decir por el valor del SMMLV y con 14 mesadas anuales.

Habiendo el ISS negado la prestación que se reclama desde el 14 de noviembre de 1991 y acudido la demandante a la jurisdicción ordinaria sólo hasta el 4 de octubre de 2018, se declararán prescritas todas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de octubre de 2015, declarándose probada parcialmente la excepción de prescripción.

Retroactivo que se calcula así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	3 y 27días	\$ 644.350	\$ 2.512.965
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022		5	\$ 1.000.000	\$ 5.000.000
			TOTAL	\$ 75.032.977

La UGPP deberá reconocer por concepto de retroactivo calculado entre el 4 de octubre de 2015 y el 31 de mayo de 2022 la suma de \$75,032,977 y a seguir reconociendo mesada pensional en cuantía del SMMLV que para el presente año asciende al valor de \$1,000,000, sin perjuicio de los incrementos anuales que establezca el Gobierno Nacional para el salario mínimo.

Se autoriza a la UGPP a descontar el porcentaje de aportes en salud, del retroactivo que aquí se calcula, y de las mesadas pensionales que se sigan causando.

Finalmente, no se accederá a condenar a la demandada a intereses moratorios solicitados, ya que, si bien es cierto, la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación laboral, ha indicado que los intereses son procedentes incluso para aquellas prestaciones que no se reconocen en virtud de la ley 100 de 1993, también ha establecido como criterio de exclusión aquellas prestaciones que se reconocen en razón de cambio jurisprudencia, y conforme lo analizado, el tema decidido aún presenta diferencia de posturas por las altas cortes, razón por la cual se excusará a la demandada de dicha condena.

Costas en ambas instancias a cargo de la UGPP y a favor de la demandante, se fijan en esta, en la suma de 5 SMMLV.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA**, en su totalidad la sentencia emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar ordena a la UGPP a reconocer y pagar pensión de sobreviviente a la señora ROSA ELVIA PEREZ LONDOÑO en calidad de compañera permanente el señor JOSÉ DIONISIO GARCÉS BERMÚDEZ, entidad que deberá pagar por concepto de retroactivo pensional calculado entre el 4 de octubre de 2015 y el 31 de mayo de 2022 la suma de \$75,032,977 y a seguir reconociendo mesada pensional en cuantía del SMMLV

que para el presente año asciende al valor de \$1,000,000, sin perjuicio de los incrementos anuales que establezca el Gobierno Nacional para el salario mínimo.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Sin firma por ausencia justificada

MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-013-2018-00625-00

Demandante: ROSA ELVIA PÉREZ LONDOÑO.

Demandado; UGPP.

DECISIÓN: REVOCA

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de junio de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO